

¿TRANSICIÓN?...ACASO. ¿A la democracia?...Ojalá!

Carlos Franco

Con el colapso de la dictadura de Fujimori, se dio a un proceso de transición. Este proceso era alentado en gran parte por la esperanza de una vida mejor para todos los peruanos que significara empleos dignos y democracia. Sin embargo, a partir de lo complejo de la situación actual, en la verdadera que significa este nuevo gobierno, es legítimo preguntarse ¿hacia dónde va la transición?.

Comencemos por el principio. Nuestra primera “transición a la democracia” – aquella de los 80 – concluyó, doce años más tarde, con el autogolpe de Fujimori. La segunda – aquella promovida por la OEA en 1992- terminó, al poco tiempo, transformando el gobierno golpista en una dictadura mafiosa. Finalmente el desplome de esta, hace poco más de un año, dio inicio –según muchos – a nuestra tercera transición. Pues bien, al momento de escribir estas líneas, algunos medios de comunicación empiezan a hacer “pública” la creciente duda instalada en las calles sobre su puerto final.

Va de suyo que esa duda no solo concluye restando todo significado al empleo teleológico de la expresión “transición” –recordemos que a través de la preposición “a”, que habitualmente la acompaña, ella refiere la meta hacia la que supuestamente se dirige- sino que, al volverla inepta para calificar el conjunto de procesos en curso, la torna intercambiable con casi cualquier otra expresión. En efecto, y para de irlo de algún modo, ¿por qué? Habríamos de considerarla conceptualmente más apropiada en un debate con aquellos, “realistas” o “escépticos”, que observan los actuales procesos como la continuidad, bajo nuevas formas, de la misma “crisis” que sacude la sociedad peruana desde el último lustro de los 70? En fin...

Como no le encuentro mucho sentido a insistir, una vez más, en mis ya antiguas críticas a la forma de pensar la democracia entre nosotros y al conjunto de fracasadas estrategias en que se expresa desde los 80, intentaré en lo que sigue internarme rápidamente en los concretos términos del debate sobre los problemas políticos que confronta hoy el país y sugerir algunas ideas al respecto. Para tales propósitos, comenzaré por dar cuenta sumaria del casi unánime diagnóstico de la situación que encontró el actual gobierno para, luego, pasar a describir la situación actual.

Del diagnóstico inicial

Una vez elegido el nuevo gobierno, se forjó un extendido consenso en torno a la existencia de un objetivo conflicto entre la acumulación de necesidades y demandas sociales y la escasez de recursos disponibles para su satisfacción. Dicho diagnóstico se basaba, por un lado, en una lectura de la situación del país que subrayaba el incremento de la pobreza, el extraordinario porcentaje de familias precisadas de donaciones alimentarias para sobrevivir, la notable caída del empleo y los ingresos populares, la pérdida de los derechos ciudadanos, el nuevo aumento de la desigualdad y exclusión social como de la anomia y la violencia urbana y, en fin un largo número de etcéteras. Ese

mismo diagnóstico, por otro lado, registraba la profundidad y duración de la recesión, el alto porcentaje de la capacidad instalada ociosa, la ruptura de la cadena de pagos, el descenso de la recaudación tributaria, el incremento del déficit fiscal, los elevados montos de las deudas externa e interna a pagar en los años siguientes, el extraordinario volumen de recursos públicos destinados al gasto corriente y el correlativo descenso del gasto de inversión e, implicado en todo ello, las evidentes limitaciones de cualquier operación de reingeniería presupuestal. Finalmente, los primeros signos de la recesión internacional eran recordados para advertir los obstáculos que encontraría el propósito de financiar el desarrollo por la vía de la promoción de exportaciones. La constatación del objetivo conflicto entre demandas y recursos cobraba luego un impulso dinámico en dicho diagnóstico, por la vía del reconocimiento de las intensas expectativas cifradas por la mayoría de la población en el cumplimiento por el gobierno de sus promesas de empleo e ingresos, y del agotamiento de la autocontención popular que había facilitado al gestión del gobierno provisional de Paniagua. Basado en estos argumentos, el diagnóstico concluía proponiendo el inicio de un gradual proceso de reactivación económica y de una, mejor si acelerada, concertación política entre los actores partidarios. De ese modo, se pensaba, el conflicto demandas recursos se haría manejable y, con ello, se sentarían bases adecuadas para el desarrollo de la “transición a la democracia”.

De la situación actual

Uno de los rasgos centrales de la situación actual es el progresivo declinamiento de la credibilidad del presidente Toledo, como de la confianza popular en su capacidad para conducir el país. Este parece ser, al menos hasta ahora, el mensaje que arrojan las encuestas de opinión. No solo nos referimos con ello al descenso en 17 puntos porcentuales (según Apoyo) o en 19 puntos porcentuales (según Analistas y Consultores) del nivel de aprobación a su gestión, al porcentaje mayor de los encuestados que la desaprueban (42% vs. 40%, Analistas y Consultores, septiembre), o a la alta y negativa evaluación de su comportamiento en relación con cinco asuntos, que concentraron su repertorio de promesas en la campaña electoral y son considerados prioritarios por la población: reactivación, empleo, ingresos, descentralización y derechos sociales.

Si bien estos hechos alcanzaron notoriedad en los análisis políticos por su carácter extraordinario no existen precedentes de que algo como ello les ocurriera, a dos meses del ejercicio del cargo, a los Presidentes del país en los últimos veinte años, ellos cobran nuevo relieve si los vinculamos con otras informaciones que aunque oficiosas, provienen de fuentes confiables. Nos referimos, por una parte, a la certidumbre de los equipos que laboran en las agencias encuestadoras de que si las muestras en estos dos meses hubieran sido nacionales, la caída de los niveles de aprobación al Presidente habría sido significativamente mayor: Pero nos referimos también al contenido de las opiniones y actitudes que se expresan en los grupos focales.

A juzgar por lo escuchado, tal parece que, luego de las críticas al incumplimiento de la promesas electorales y la agria comparación entre los exigüos aumentos acordados a los empleados públicos y jubilados y el sueldo del Presidente, la conversación en dichos grupos se desplazaba a una suerte

de acuerdo sobre la “falta de autoridad” de Toledo cuyo significado, según los analistas de los protocolos, más que expresar una demanda de “mano fuerte”, comunicaba un reclamo de “gobierno”, “orden” o “capacidad de gobierno” para luego concluir concentrándose tan sarcástica como ominosamente, en un debate sobre los plazos que se asignaban a su permanencia en el poder.

Cierto es que los datos señalados no deben ser dramatizados, pues lo que hacen es revelar impresiones o estados de ánimo que las circunstancias y el tiempo pueden modificar. Pero nos permiten, sin embargo, preguntarnos por las causas que los originan. Entre ellas, la percepción popular de que la reactivación no marcha y/o que sus expectativas de empleo e ingresos se esfuman, resulta particularmente importante por sus sombrías consecuencias deslegitimadoras del gobierno y el régimen en el futuro próximo. Mas aún cuando, luego de que el año concluya con un crecimiento cifrado entre cero y uno por ciento y que la estimación oficial para el siguiente desciende de 5,5% a 4%, la gente advierta que, para ella y en términos efectivos, no habrá mejora significativa alguna en sus condiciones de vida. Como los argumentos que fundamentan esta certidumbre se presentan en otros artículos de la revista, nos ahorraremos su mención ahora.

Otro factor que contribuye a explicar el deterioro de la situación es la frustración de las expectativas en la concertación política. No solo en este sentido es que, para todo propósito práctico, la concertación entre el gobierno y los partidos de “oposición” no avanza.

Más preocupante aún es la sensación generalizada del digámoslo así: notorio desentendimiento de las autoridades, instituciones, equipos técnicos y partido del gobierno. Va de suyo que, si este no concerta internamente sus decisiones, declaraciones y acciones, resulta difícil esperar que sus relaciones con el resto de actores políticos adquieran pronto un sentido claro y predecible.

En todo caso, y en el contexto antes descrito, es que se explican las preguntas de la calle acerca de “que ocurriría si”, en los próximos meses, continúa el descenso del Presidente en las encuestas, la economía sigue inmovilizada, se reactivan las protestas populares, el gobierno no se ordena internamente, los militares... en fin. ¿Cómo sorprenderse entonces que, en algunos medios y expresando intenciones e intereses distintos, se comience a sugerir, a tan solo tres meses de ejercicio del gobierno, que “el problema está en palacio”, o a plantear su “reemplazo por el Vicepresidente”, “la entrega del ejercicio real del gobierno a un Premier dotado de los poderes necesarios para ello” o “la elección de tal Premier por el Congreso”?

Para concluir

Según los propósitos iniciales de su autor, este informe debió concluir relacionando la descripción de la situación política con los problemas que han bloqueado los intentos precedentes de transitar a la democracia y con una crítica de las formas en que se plantearon las propuestas de reactivación económica y concertación política en el diagnóstico que se formulara antes del acceso de Toledo al gobierno. De igual modo, su autor hubiera deseado identificar las posibilidades reales de reorientar el curso que siguen los acontecimientos en el país, en la circunstancias definidas por la crisis mundial y

regional. En vista de que, por razones de tiempo y espacio ellos no es posible, el texto solo logra llamar la atención sobre los peligros que se ciernen sobre esta nueva “transición” o argumentar ese trivial mensaje del sentido común que nos dice que “las cosas no marchan bien”.

Para los efectos, sin embargo, de sugerir el sentido de sus propósitos, el autor se permite terminar su informe formulándole solo tres preguntas a su eventuales lectores. Primera: sobre la democracia de las elites económicas, políticas e intelectuales del país reflejando lo que la mayoría de los peruanos tiene en mente cuando hablan de ella?. Segunda, ¿creen ustedes que es posible construir la democracia aplicando hoy las reglas económicas neoliberales o siguiendo las pautas trazadas por los organismos multilaterales, los bancos de inversión o las agencias evaluadoras de riesgos?. Finalmente, tercera, ¿creen ustedes que cualquier alianza política para definir el camino a la democracia en el Perú puede prescindir del concurso de la movilización popular, la participación directa de las organizaciones de trabajadores y lo siento sin no están de acuerdo del Apra?.